

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de Málaga

C\ Fiscal Luis Portero García, s/n, 29010, Málaga. Tfno.: 951939071, Fax: 951939171,

N.I.G.: 2906745320210003017.

Procedimiento: Procedimiento Abreviado 432/2021. **Negociado:** LJ

Actuación recurrida: Función Pública

De: [REDACTED]

Procurador/a: JUAN MANUEL MEDINA GODINO

Contra: EXAYUNTAMIENTO DE MALAGA y ASES. JUR. AYTO. MÁLAGA

Letrado/a: S.J.AYUNT. MALAGA

En nombre de S.M. el Rey y de la autoridad que el pueblo español me confiere, he pronunciado la siguiente

S E N T E N C I A Nº 277/25

En Málaga, a uno de diciembre de dos mil veinticinco.

María Asunción Vallecillo Moreno, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de esta Ciudad, habiendo visto el presente recurso contencioso-administrativo número 432/21, sustanciado por el Procedimiento Abreviado, interpuesto por [REDACTED], representado por el Procurador Sr. Medina Godino y asistido por la Abogada Sra. Guillén Serrano contra el Ayuntamiento de Málaga, representado y asistido por uno de los Letrados adscritos a los Servicios de Asesoría Municipal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que la mencionada representación de [REDACTED] interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Concejal delegado de Recursos Humanos y Calidad por delegación de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga de fecha 13 de septiembre de 2.021 por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de fecha 6 de julio de 2.021 por la que se desestima la



reclamación formulada por el recurrente, Policía Local de dicha Corporación, de cantidad por diferencias retributivas derivadas de la reducción de jornada solicitando se le abonen todas las cantidades que se le han descontado en exceso en cada una de las nóminas en las que se han efectuado descuentos de haberes en aplicación del sistema de cálculo previsto más gravoso económicamente, formulando demanda arreglada a las prescripciones legales en la cual solicitaba previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, se dictara sentencia que reconociera haber lugar al pedimento obrado.

SEGUNDO.- Que admitida a trámite la demanda, se dio traslado de la misma y de los documentos acompañados a la Administración demandada, reclamándole el expediente, ordenando se emplazara a los posibles interesados y se citó a las partes para la celebración de la vista.

TERCERO.- Recibido el expediente administrativo se exhibió a la parte actora para que pudiera hacer alegaciones en el acto de la vista.

CUARTO.- Celebrada la vista en la hora y día señalados, comparecieron las partes, ratificándose el demandante en los fundamentos expuestos en la demanda, formulando el demandado las alegaciones que estimo convenientes sobre la pretensión de la parte actora y tras la fase de prueba y el trámite de conclusiones, se terminó el acto trayendo los autos a la vista para sentencia, si bien por providencia de 30 de mayo de 2.024 se suspendió el plazo para dictar sentencia en el presente procedimiento, hasta la resolución de los recursos de apelación que se tramitaban en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA con sede en Málaga en supuestos idénticos al presente y verificado lo anterior y tras el preceptivo traslado a las partes para alegaciones sobre los efectos de las sentencias dictadas, se dicta la presente resolución.



QUINTO.- Que en la tramitación de este procedimiento se han observado las formalidades legales, excepto el plazo para dictar sentencia debido al cúmulo de asuntos que penden de este Juzgado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La parte actora solicita que se dicte sentencia por la que se anule, por ser contraria a derecho, la resolución impugnada y se reconozca y liquide el abono de las cantidades adeudadas que en su día fueron retenidas con base en el Decreto de 24 de marzo de 2015, que es nulo por resolución judicial firme, y se condene al Ayuntamiento demandado al abono de las mismas por el periodo no prescrito de los últimos cuatro años, más los intereses legales correspondientes, entendiéndose que el sistema de cálculo que se debe adoptar para la determinación del valor económico de reducción de retribuciones del trabajador, es el regulado en el RD 2670/1998, de 11 de diciembre, en concreto, apartado 2 del artículo 1.

La Administración demandada en oposición a la pretensión formulada de contrario consideró que las resoluciones que autorizaron la reducción de jornada y fijaron las retribuciones a abonar al recurrente (Decreto de fecha 21 de agosto, 29 de septiembre y 23 de octubre de 2.017, 25 de junio de 2.018 y 22 de enero y 22 de febrero de 2.019), no fueron recurridas por lo que devinieron firmes y consentidas y respecto de las minoraciones practicadas con posterioridad a dicha fecha se realizaron en aplicación del sistema determinado en la resolución de 14 de mayo de 2.019 sin necesidad de acto administrativo expreso, pero estos descuentos retributivos llevados en las nóminas en cada uno de los meses podían haber sido impugnados en ese momento por el recurrente.

SEGUNDO.- Concretado en estos términos el debate esgrimido ante esta instancia, ha de hacerse una precisión relevante en el caso presente cual es las sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA con sede en Málaga, la numero 1904/2024, de 1 de julio, recaída en el recurso de apelación nº 274/2024 y la



número 2687/2024, de 24 de octubre, recaída en el recurso de apelación nº 105/2024 por reclamaciones idénticas a la que es objeto de este recurso contencioso-administrativo y con base en los mismos argumentos jurídicos, planteando idénticas cuestiones jurídicas.

La primera de las sentencias, la numero 1904/2024, de 1 de julio, ante un supuesto sustancialmente igual al presente y ante la normativa y misma resolución razona como sigue:

“Distinto es que el Sr..., en cuanto funcionario de la Policía Local de Málaga al que se le vino aplicando en sus nóminas la inadecuada fórmula de cálculo de deducción de haberes en caso de reducción de jornada por razón de guarda legal que preveía dicho decreto municipal, sí pueda invocar aquella nuestra sentencia para sostener, como pretende, la devolución de lo deducido en exceso en los cuatro años anteriores a la solicitud presentada el 31 de mayo de 2021 no afectados por la prescripción.

Mas dicha pretensión, en principio factible, encuentra un obstáculo infranqueable en las sucesivas resoluciones municipales a las que alude la sentencia en el primer párrafo del fundamento cuarto que obran a los fols. 52 al 109 del expediente administrativo, en las que a solicitud del funcionario policial le fueron siendo dadas por el ayuntamiento autorizaciones para reducir su jornada laboral durante una hora diaria en periodos temporales cortos, consignándose en ellas además de manera expresa tanto la aplicación de las determinaciones del decreto de 24 de marzo de 2015 para calcular la minoración de las retribuciones, como los concretos porcentajes resultantes en que debían reducirse tanto aquellas retribuciones, incluidas las pagas extraordinarias, como las cotizaciones a la Seguridad Social. Estas resoluciones administrativas son firmes y consentidas y, al contrario de lo que mantiene el apelante, sí que impiden que pueda tener éxito su ulterior reclamación al tratarse de actos individuales y singulares dictados para el interesado y a su propia instancia, frente a los que se aquietó y que por tanto causaron para con él estado.

Además no consta en el expediente administrativo que tras el dictado de la sentencia de la Sala de 9 de julio de 2020, y más concretamente desde que el Juzgado n.º 1 de Málaga comunicara su firmeza al ayuntamiento para su cumplimiento el 12 de noviembre de 2020, la corporación local hubiera aplicado al Sr... la inadecuado fórmula de cálculo, pues la última de las resoluciones firmadas por el teniente alcalde delegado de Recursos Humanos y Calidad en el sentido indicado data del 26 de diciembre de 2018 y se refiere a varios días de los meses de enero a junio del año 2019 en los que al funcionario policial se le autorizaba la reducción de jornada durante una hora



para el cuidado de hijo menor de doce años con reducción de haberes en determinados porcentajes que resultaban de aplicar el consabido decreto de 24 de marzo de 2015 (fols. 104 al 109 del expediente).

Con estos antecedentes, valorados oportunamente por el magistrado a quo, consideramos que debe imponerse el respeto al principio de seguridad jurídica consagrado en el art. 9.3 de la Constitución y pierde interés la polémica suscitada entre las partes de si la meritada sentencia invalidó el decreto municipal por causas de nulidad de pleno derecho o de mera anulabilidad, pues tratándose dichas resoluciones de actos firmes y consentidos -de naturaleza obviamente no sancionadora-, y no instándose por el Sr... en su solicitud la revisión de oficio de aquellas, como con tino apreció el juzgador y no rebate el apelante, la pretensión de abono de diferencias salariales no puede tener la acogida de la Sala.

Ahora bien, y según resulta de la propia resolución municipal de 6 de julio de 2021 impugnada originariamente en la instancia (fols. 116 al 122 del expediente), hay tres concretas mensualidades en las que al Sr... se le hizo el descuento de haberes por reducción de jornada aplicando directamente el ayuntamiento la forma de cálculo del decreto de 24 de marzo de 2015 sobre las nóminas, sin dictar antes resolución expresa individualizada en los términos que arriba hemos visto. Obedecía esta nueva forma de proceder a una resolución de 14 de mayo de 2019 en la que se establecía el procedimiento para la tramitación y autorización de las reducciones de jornada solicitadas que se comenzó a aplicar desde la nómina del mes de julio de 2019 y en la que se establecía, entre otros extremos, la no exigencia de dictar resolución expresa respecto de las solicitudes que cumpliesen los requisitos exigidos.

Esto propició, en cuanto ahora interesa, que al Sr... se le aplicaran directamente en las nóminas de los meses de agosto, octubre y noviembre de 2019 (este es el último mes en que tuvo disminución de haberes por reducción de jornada) unos porcentajes de reducción, respectivamente, de 7,60, 5,30 y 0,80. Solo para esto tres meses sí toma carta de naturaleza la jurisprudencia que invoca el apelante en su recurso y consideramos, en su virtud, que esa nóminas, que ni siquiera obran en el expediente, no impiden el éxito de la reclamación salarial del funcionario público formulada el 31 de mayo de 2021, por tanto, dentro del plazo de prescripción de cuatro años (por todas, SSTs de 15 de noviembre de 2006 [rec. 11.020/2004], de 24 de febrero de 2016 [rec. 19/2015], y de 26 de febrero de 2024 [rec. 323/2022]).

En esos tres concretos meses al no existir una previa resolución expresa municipal y al haber aplicado el ayuntamiento en las nóminas del Sr... unos porcentajes de reducción resultantes del sistema de cálculo que establecía el decreto de 24 de marzo de 2015 anulado por esta Sala, solo respecto de ellos,



decimos, el recurso sí debe prosperar y, con revocación de la sentencia en este particular extremo, hemos de reconocer el derecho del funcionario policial a que el ayuntamiento le abone, tal y como interesaba en su demanda, las diferencias retributivas que correspondan entre las cantidades que se le descontaron en los meses de agosto, octubre y noviembre de 2019 en aplicación de aquel incorrecto sistema, y las que resulten de aplicar el sistema de cálculo de reducción de las retribuciones según lo establecido en el Decreto 2670/1998, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 30.1 f) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, cuyo artículo único, apartado 2, dispone que «para el cálculo del valor hora aplicable a dicha reducción se tomará como base la totalidad de las retribuciones íntegras mensuales que perciba el funcionario dividida entre el número de días naturales del correspondiente mes y, a su vez, este resultado por el número de horas que el funcionario tenga obligación de cumplir, de media, cada día», así como en el artículo 12.4 del Acuerdo de Funcionarios de 2011 cuyo contenido viene a corresponderse con aquel precepto, sistema este que es justamente el que se petitionaba en la demanda y que parece que ha venido aplicando el ayuntamiento a sus funcionarios desde la nómina del mes de enero de 2021”.

La segunda de las sentencias, la número 2687/2024, de 24 de octubre, afirma así mismo:

“Se ha de insistir en la catalogación del decreto 24 de marzo de 2025 como disposición de alcance general en cuanto que dispone una regulación común para todo el cuerpo de funcionarios municipales. Por ello la declaración de nulidad del mismo es por definición de nulidad radical del art. 47.2 LPAC la única que es admisible cuando de disposiciones reglamentarias se trata.

Insistimos en que no puede darse el supuesto de acto firme cuando se impugnan las nóminas por considerar que cada una de ellas constituyen actos administrativos típicos, periódicos y en masa, singulares y autónomos, y que pueden ser revisadas judicialmente al alza hasta donde alcance la prescripción [cfr. STS de 10 Diciembre de 2009 (recurso 4686/2008) al situarse las retribuciones en una relación de tracto sucesivo. Cada acto de pago remunera servicios prestados en distinto período y a los que puede acompañar distintas características de la situación del funcionario que los devenga. De esta manera, es viable reclamar contra las nóminas o reclamar, como aquí sucede, por diferencias retributivas con el período de prescripción de cuatro años [STS de 21 de Junio de 2012 (recurso 4540/2011) y 24 de febrero de 2016 (recurso 19/2015)]

Es a partir de la declaración de la nulidad de la disposición administrativa aplicada por la que se detraen proporcionalmente sumas de la



masa retributiva por motivo de la reducción de jornada el momento en el que surge para el funcionario interesado el derecho a reclamar el monto de las sumas no prescritas (art. 25.1.a) de Ley General Presupuestaria). No constando la notificación de esa sentencia al funcionario reclamante se debe entender que su derecho nace a partir de la toma de conocimiento cabal de la misma que puede entenderse coincidente con el momento de la formulación de su reclamación en vía administrativa.

Procede en consecuencia acceder a lo solicitado y estimando en recurso de apelación planteado con revocación de la sentencia de instancia, se estima el recurso contencioso administrativo planteado contra la resolución municipal de fecha 13 de septiembre de 2021 y 6 de julio de 2021 que se anulan, ordenando al Ayuntamiento demandado acceder a un nuevo cálculo de la reducción proporcional de retribuciones por motivo de reducción de jornada en aplicación del RD 2670/1998 en relación con los período retributivos no prescritos”.

TERCERO.- A la vista de lo expuesto en dichas sentencias se puede concluir en la existencia de dos supuestos: aquellos en los que a solicitud del funcionario policial le fueron dadas por el ayuntamiento autorizaciones para reducir su jornada laboral en periodos temporales cortos, consignándose en ellas además de manera expresa tanto la aplicación de las determinaciones del decreto de 24 de marzo de 2015 para calcular la minoración de las retribuciones, como los concretos porcentajes resultantes en que debían reducirse tanto aquellas retribuciones, incluidas las pagas extraordinarias, como las cotizaciones a la Seguridad Social, y en los que el funcionario no recurrió dicho cálculo de minoración y aquellos otros en los que el Ayuntamiento aplica en las nóminas la inadecuada fórmula de cálculo de deducción de haberes en caso de reducción de jornada por razón de guarda legal que preveía el Decreto de 24 de marzo de 2015 y que si puede invocar su nulidad para sostener la devolución de lo deducido en exceso en los cuatro años anteriores a la solicitud presentada no afectados por la prescripción, pues en este último caso no existe resolución expresa individualizada sino que el Ayuntamiento aplicó directamente la forma de cálculo del decreto de 24 de marzo de 2015 sobre las nóminas, sin dictar antes ninguna resolución.



Ello es lo que lleva a estimar parcialmente el recurso de apelación en la primera de las sentencia y a estimarlo íntegramente en la segunda sin contradicción entre ambas.

Y descendiendo al caso presente y teniendo en cuenta que en el caso del recurrente se dictaron resoluciones que autorizaron la reducción de jornada y fijaron las retribuciones a abonar ((Decreto de fecha 21 de agosto, 29 de septiembre y 23 de octubre de 2.017, 25 de junio de 2.018 y 22 de enero y 22 de febrero de 2.019), que no fueron recurridas por lo que devinieron firmes y consentidas y, por otra parte, que las reducciones practicadas de más en la nómina del mes de diciembre de 2019, y de los meses de julio y diciembre de 2020, en la que se le practicó un porcentaje de reducción del 8,00; el 15,20 y 2,3 respectivamente, en aplicación del Decreto que fue anulado y sin que hubiera en ese caso previa resolución de concesión, como consta en el expediente y en la propia Resolución del Ayuntamiento de fecha 20 de septiembre de 2021, que fue objeto del presente recurso, siendo así que no es hasta el mes de enero de 2021, que el Ayuntamiento empezó a aplicar el sistema de descuento correcto, procede la estimación parcial del presente recurso, en iguales términos que los aplicados por la Sala en el caso sometido a su enjuiciamiento y sin que se haga preciso ningún razonamiento más en este caso para aplicando sus fundamentos de derecho y los principios de igualdad y seguridad jurídica, llegar a la misma conclusión.

Es por todo ello que el recurso contencioso-administrativo ha de ser estimado parcialmente en el sentido que se dirá en el Fallo de esta resolución.

CUARTO.- Establece el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa tras su reforma por la Ley 37/2011, aplicable a este procedimiento por razones temporales, que en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho; añadiendo



que en los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad. Por lo que habiendo procedido una estimación parcial de la pretensión actora y no apreciándose mala fe o temeridad, no procede hacer especial condena en las costas.

Vistos los preceptos citados, los invocados por las partes y demás de pertinente aplicación al caso de autos,

F A L L O

Que estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Sr. Medina Godino, en nombre y representación de [REDACTED] contra el Ayuntamiento de Málaga, procede anular la resolución administrativa impugnada descrita en el antecedente de hecho primero de esta resolución, al ser contraria a derecho, reconociendo al recurrente el derecho a que el Ayuntamiento de Málaga le abone la cantidad que corresponda por la diferencia entre las retribuciones que efectivamente le redujo por disminución de jornada en las nóminas de los meses de diciembre de 2019, y julio y diciembre de 2020 en aplicación del sistema de cálculo que preveía el decreto municipal de 24 de marzo de 2015, y las reducciones que correspondan conforme al Decreto 2670/1998, de 11 de diciembre, y al Acuerdo de Funcionarios de 2011, más los intereses legales desde la reclamación efectuada el 9 de junio de 2021 y sin que proceda hacer pronunciamiento alguno en cuanto a las costas.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación por escrito presentado en este Juzgado en el plazo de quince días contados desde el siguiente a su notificación, indicándose la necesidad, en su caso, de constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1.985, de



1 de julio del Poder Judicial añadida por la Ley Orgánica 1/2.009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1.985, de 1 de julio del Poder Judicial, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones nº 2984 de este Juzgado y con la advertencia de que no se admitirá a trámite el recurso si no está constituido dicho depósito y así se acredita.

Y poniendo testimonio en los autos principales, inclúyase la misma en el Libro de su clase. Una vez firme la presente resolución devuélvase el expediente administrativo al Centro de su procedencia junto con testimonio de esta resolución.

Así, por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

